

TEMA 27

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRAFICO (II). INFRACCIONES Y SANCIONES. RESPONSABLES DE INFRACCIONES. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SANCIONES; ESPECIAL REFERENCIA A DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VIAL (DEV) Y TABLÓN EDICTAL DE SANCIONES DE TRÁFICO (TESTRA). EL CENTRO ESTRADA. RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. RECURSOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICE

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO (II):

1. INFRACCIONES.

2. SANCIONES.

- La sanción: La multa.
- La suspensión de las autorizaciones.
- La pérdida de puntos.
- Anotación y cancelación de antecedentes. Sus efectos.

3. RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES.

4. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SANCIONES; ESPECIAL REFERENCIA A DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VIAL (DEV) Y TABLÓN EDICTAL DE SANCIONES DE TRÁFICO (TESTRA).

- La notificación.
- Notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV).
- Notificación en el domicilio.
- Notificaciones en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).
- Notificación por BOE.
- Otros medios de notificación.

5. EL CENTRO ESTRADA.

6. RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA:

- RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:

Concepto.
Regulación.

- OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.
Recurso extraordinario de revisión.

Revisión de oficio.

Revocación de actos y rectificación de errores.

- **Cuadro general de competencia para resolver en materia de recursos.**

7. RECURSOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS:

- **El recurso de reposición (de la gestión de apremio).**
- **La reclamación económico-administrativa y los Tribunales Económico-administrativos.**

8. RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:

Las partes del proceso:

- **Pretensiones de las partes.**
- **La acumulación.**
- **La cuantía del recurso.**
- **Interposición del recurso y reclamación del expediente.**
- **Plazo de interposición del recurso.**
- **La demanda.**
- **La contestación a la demanda.**
- **Prueba.**
- **Vista y conclusiones.**
- **Procedimiento abreviado.**
- **La sentencia.**
- **La ejecución de sentencias.**
- **Devolución de la multa por ejecución de sentencias.**

1. INFRACCIONES.

La Ley de Seguridad Vial (LSV) dispone que tendrán el carácter de infracciones administrativas y serán sancionadas en los casos, forma y medida que en ella se determinen las acciones u omisiones contrarias a la Ley de Seguridad Vial, desarrolladas, en su caso, reglamentariamente. Dentro de dicho desarrollo reglamentario cabe destacar el realizado a través de los Reglamentos de Circulación, de Conductores, de Vehículos, de Escuelas Particulares de Conductores, de Centros de Reconocimiento de Conductores, etc.

En el presente tema se hace tan sólo esta sucinta introducción en materia de infracciones, al haber sido éstas objeto de estudio detallado en el tema 25.

Determinadas conductas pueden constituir delitos o faltas tipificadas en las leyes penales (arts. 379 y ss del C. Penal), tal como se estudiará en el tema 28.

2. SANCIONES

El principal efecto de la infracción es la sanción, y, dentro de ella, la multa.

La sanción: La multa.

La LSV establece que las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves con multa de 200 euros; y las muy graves con multa de 500 euros (téngase en cuenta que, mientras en las leves puede ser una cantidad variable hasta 100 € las graves y muy graves tienen un importe fijo) No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía prevista en el Anexo IV de la LSV. Estos importes pueden ser reducidos en un 50% mediante el pago en el caso del procedimiento abreviado.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que según artículo 80.2:

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que:

a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) serán sancionadas con multa de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 77. h) se sancionará con multa de 6.000 euros.

d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

Así, según artículo 80.2. a) en el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

La multa por la infracción prevista en el artículo 77.j) será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave. El citado artículo se refiere al incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. Este importe no admite reducción (en estos supuestos no se cita el incumplimiento de identificar del conductor habitual, ya que en este caso el responsable es directamente el conductor habitual, salvo que acredite que era otro el conductor).

a) La infracción recogida en el artículo 77.h) se sancionará con multa de 6.000 euros. El citado artículo se refiere a conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. Este importe no admite reducción.

b) Las infracciones recogidas en el artículo 77 que se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros y son las referidas a:

- Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.
- No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
- Incumplir las normas, reglamentariamente establecidas, que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.
- Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. No constituirán infracción los sistemas de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.
- Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de

conductores autorizados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, que afecten a la cualificación de los profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a los elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un impedimento a las labores de control o inspección.

- Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la obligación de la reparación del daño causado.

Asimismo, en el supuesto de la infracción recogida en el artículo 77 q) se podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el período de un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas actividades. La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará aparejada una nueva suspensión por un período de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento, y de un año si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.

Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación específica, mediante una multa de 601 a 3005 € (con posible reducción del 50% si se utiliza el procedimiento abreviado) y el posible depósito o precinto del vehículo, mediante el procedimiento sancionador de tráfico y siendo el competente para sancionar el Jefe Provincial de Tráfico o los órganos previstos en las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias. Del importe de la sanción se entregará el 50% al Consorcio de Compensación de Seguros.

La cuantía económica de las multas establecidas en el art 80.1 LSV y en el Anexo IV (cuadro de velocidades) podrá incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77 n) a r). Es decir permite el incremento hasta el 30%, pero no la reducción.

La suspensión de las autorizaciones.

La Ley 18/2009 suprimió la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción por entender que dicha sanción va incluida en los efectos derivados de la aplicación del permiso por puntos.

La desaparición de la medida de suspensión del permiso o licencia no impide y no debe confundirse con la SUSPENSIÓN CAUTELAR o la INTERVENCIÓN, ya que en este caso estamos ante medidas de carácter preventivo para evitar un riesgo

o peligro que se puede adoptar durante los procedimientos de nulidad, lesividad y, fundamentalmente, en los de pérdida de vigencia cuando se sospecha que se ha perdido alguno de los requisitos necesarios para su obtención.

Tampoco debe confundirse con la sanción de suspensión en el supuesto de la infracción recogida en el artículo 80.3) a la que nos hemos referido anteriormente: *En el supuesto de la infracción recogida en el artículo 77. q) se podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el período de hasta un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para las mismas actividades.*

La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización llevará aparejada además una nueva suspensión por un período de seis meses al cometerse el primer quebrantamiento, y de un año si se produjese un segundo o sucesivos quebrantamientos.

La pérdida de puntos.

La Ley 17/2005, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, concebía dicha retirada de puntos como una actuación administrativa automática como resultado de la firmeza de una sanción administrativa, es decir, la retirada de puntos no tenía naturaleza sancionadora y como, consecuencia de ello, se rechazaban las argumentaciones de los denunciados sobre este tema por entender que la retirada de puntos no tenía carácter sancionador.

Dicha situación se ha visto cuestionada por la STS Contencioso de 04/06/2009, que reconoce la naturaleza sancionadora de la retirada de puntos y, por lo tanto, la necesidad de que el denunciado tenga conocimiento de los puntos que se van a detraer.

Como la pérdida total de puntos da lugar a un expediente de pérdida de vigencia que puede ser a su vez objeto, nuevamente, de recurso, será preciso determinar la naturaleza sancionadora o no de dicho expediente, entre otros motivos para poder conocer la ejecutividad de su resolución.

En el supuesto de otras Administraciones con competencia sancionadora, la retirada de puntos se producirá cuando la sanción sea firme en vía administrativa y se comunique al registro de la DGT, para lo que el artículo 87.4 LSV dispone que:

“4 En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores” (incluso en el supuesto de conductores titulares de permisos extranjeros, comunitarios o no).

En los procedimientos tramitados por las Jefaturas Provinciales el sistema es automático, produciéndose la pérdida de puntos al día siguiente de realizado el pago en los procedimientos abreviados; al día siguiente de transcurridos treinta días

naturales desde la notificación de la denuncia en los procedimientos sumarios; y al día siguiente de notificada la resolución sancionadora en los procedimientos ordinarios.

La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho de que se deriva la detracción de puntos se produce con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se exige autorización administrativa para conducir (Anexo II), (es decir, al conductor de bicicleta o al peatón infractor no se le pueden detraer puntos).

Anotación y cancelación de antecedentes. Sus efectos.

El artículo 113 LSV dispone que:

Artículo 113 Anotación y cancelación

- 1. Las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico por la autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa.*
- 2. Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores que se impongan por la comisión de delitos contra la seguridad vial.*
- 3. En el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico quedarán reflejadas las sanciones firmes por infracciones graves y muy graves en las que un vehículo tanto matriculado en España como en el extranjero estuviese implicado y el impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán parte del historial del vehículo.*
- 4. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.*

Por excepción a lo anterior, cuando se trate de sanciones tramitadas por el procedimiento abreviado, la que la sanción **no** computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

Asimismo, la LSV introduce una importante novedad en relación con las limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas, al disponer que:

El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún trámite relativo a los vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos cuando figurasen como impagadas en su historial de conductor cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves.

El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo cuando figurasen como impagadas en el historial del vehículo cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves.

Queda exceptuado de lo dispuesto en los párrafos anteriores el trámite de baja temporal o definitiva de vehículos.

3. RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES (art. 82 LSV):

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en la LSV recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante, se establece que:

a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.

Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate de conductores profesionales.

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 11.

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 11. La misma responsabilidad corresponderá a los titulares de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí depositados.

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado

de conservación, cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será responsable de las infracciones por estacionamiento o por impago de los peajes de las vías que lo tengan regulado, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho

4. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE SANCIONES; ESPECIAL REFERENCIA A DIRECCIÓN ELECTRÓNICA VIAL (DEV), TABLON EDICATAL UNICO DEL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO (BOE) Y TABLÓN EDICTAL DE SANCIONES DE TRÁFICO (TESTRA)

La notificación:

Notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV).

La LSV en su artículo 90, dispone que la Dirección General de Tráfico asignará además a todo titular de una autorización administrativa de conducción o de circulación de vehículo, y con carácter previo a su obtención, una Dirección Electrónica Vial (DEV) Esta dirección se asignará automáticamente a todas las autorizaciones de que disponga su titular en los Registros de Vehículos y de Conductores.

La asignación de la Dirección Electrónica Vial se realizará también al arrendatario a largo plazo que conste en el Registro de Vehículos, con carácter previo a su inclusión.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si el titular de la autorización es una persona física sólo se le asignará una Dirección Electrónica Vial cuando lo solicite voluntariamente. En este caso, todas las notificaciones se practicarán en esa Dirección Electrónica Vial.

En la Dirección Electrónica Vial además se practicarán los avisos e incidencias relacionados con las autorizaciones administrativas recogidas en la LSV.

La LSV dispone que las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial.

El sistema de notificación en la Dirección Electrónica Vial permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de notificación, así como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial, transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará constar en el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.

El Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, vendrán obligados a efectuar las notificaciones telemáticas a la entrada en vigor de la presente Ley (25-05-2010).

Las Administraciones locales con competencias en materia de tráfico estaban inicialmente obligadas a efectuar las notificaciones telemáticas a la Dirección Electrónica Vial en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Ley (es decir, el 25-5-2012).

La DEV consiste, en esencia, en facilitar a la Administración una dirección de correo electrónico donde recibir las notificaciones.

Notificación en el domicilio.

En el caso de que el denunciado no tuviese Dirección Electrónica Vial, la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los Registros de la Dirección General de Tráfico.

Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se anotará esta circunstancia en el expediente sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el tablón Edictal Único del Boletín Oficial del estado (BOE) según artículo 91, y con carácter previo y facultativo también podrán publicarse en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), según artículo 92.

Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el expediente sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento.

Si el resultado de la notificación es que el interesado es desconocido en el domicilio al cual se dirigió la misma, la Administración procederá a la publicación en

el BOE e incluso en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) según lo antes expuesto.

Notificaciones en el BOE y Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

Artículo 91 Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite.

Artículo 92 Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)

1. Con carácter previo y facultativo, las notificaciones a que se refiere el artículo anterior podrán practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

2. El funcionamiento, la gestión y la publicación en el TESTRA se hará conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y en la de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Otros medios de notificación.

Está resultando de gran eficacia realizar notificaciones por otros medios que, sin ofrecer garantía de su recepción, pueden mejorar la notificación (por ejemplo, notificaciones por teléfono móvil, correo ordinario, etc.)

5. EL CENTRO ESTRADA.

La Ley 40/2015 detalla los principios que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española, deben regir la actuación de la Administración General del Estado.

En aplicación de dichos principios, y en especial de los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y de agilidad de las actividades materiales de gestión, resulta conveniente la delegación de competencias, sin perjuicio del permanente conocimiento y del necesario control del ejercicio de las facultades delegadas. Asimismo, en consideración a la especificidad de ciertos asuntos, por razones de coherencia y racionalidad, así como de agilidad en la tramitación de los procedimientos administrativos, es conveniente atribuir el ejercicio de determinadas

competencias, en unos casos, a los órganos administrativos con mayor proximidad, por razón de la materia, a las tareas desempeñadas y, en otros casos, a órganos creados al efecto que dispongan de los medios adecuados para una gestión y una más eficaz tramitación de determinados procedimientos singulares dentro de aquéllos.

En este último caso se encuentran los procedimientos sancionadores por infracciones a las normas de circulación y seguridad vial detectadas mediante el empleo de medios técnicos de captación y reproducción de imágenes, cuya especificidad se manifiesta en una doble vertiente: por una parte, por las propias características del medio técnico a través del que se tiene conocimiento de los hechos; y, por otra, por la singularidad de la tramitación administrativa del procedimiento sancionador.

Esta especificidad, así como la necesidad de agilizar la tramitación de estos procedimientos singulares, aconsejan un tratamiento homogéneo de éstos en todo el territorio nacional donde ejerce sus competencias la Administración General del Estado y la centralización de toda su gestión. Estas razones, así como el aumento progresivo de la implantación de medios técnicos de captación y reproducción de imágenes a los que se refiere el párrafo anterior, con el consiguiente aumento producido de la tramitación de expedientes sancionadores para el que no está dimensionada la organización periférica de la Jefatura Central de Tráfico, llevaron a la creación, mediante la ORDEN INT/2035/2007, de 2 de julio (BOE núm. 164, de 10 de julio), del **Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas**, también denominado **Centro ESTRADA**.

Este Centro, según establece la referida Orden en sus apartados segundo y cuarto, está dotado de los medios personales y materiales adecuados para ejercer funciones de apoyo telemático y administrativo para la tramitación de los procedimientos instruidos por estas infracciones.

El artículo 84.2 de la LSV detalla que Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y extensión que estimen conveniente. En particular podrán delegar en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en las normas citadas, previa aprobación del Director/a General de Tráfico, **se delegan** en el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas las siguientes competencias:

1. Para sancionar las infracciones a lo dispuesto en la LSV, cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo y que estén ubicados en instalaciones fijas (también denominadas pórticos).

2. Para sancionar las infracciones por exceder los límites de velocidad reglamentariamente establecidos, cuando se haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan

la identificación del vehículo que no estén ubicados en instalaciones fijas, y no se haya producido la parada e identificación del conductor del vehículo.

3. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento de la obligación de identificar al conductor del vehículo en el momento de ser cometida la infracción, prevista en el 11 de la Ley de Seguridad Vial, cuando dicho incumplimiento se haya producido durante la tramitación de un procedimiento sancionador instruido por una infracción de las previstas en los apartados anteriores.

4. Para sancionar las infracciones por el incumplimiento por parte del titular del vehículo, o del arrendatario a largo plazo, en su caso, de la obligación de someter el vehículo a la inspección técnica periódica en el plazo debido, cuando se haya tenido conocimiento de los hechos por la información que conste en los Registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. (Desde noviembre de 2013).

Cabe señalar que esta delegación de competencias **no supone la transferencia de la titularidad de la competencia, sino solamente de su ejercicio**. Asimismo, la delegación comprenderá también la de la **instrucción de los correspondientes procedimientos** en las unidades encargadas de las tareas materiales y técnicas de tramitación administrativa del Centro.

Siempre que se haga uso de la delegación otorgada, **se indicará expresamente esta circunstancia** y *las resoluciones que se adopten se considerarán dictadas por el Jefe/a Provincial de Tráfico*.

La delegación de competencias no será obstáculo para que el Jefe/a Provincial de Tráfico pueda **avocar** para sí el conocimiento de un asunto, de acuerdo con lo establecido en el art. 10 la ley 40/2015.

6. RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.

RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO.

Concepto.

El recurso administrativo es la actuación que el administrado dirige contra los actos y disposiciones de la Administración respecto de los cuales considere que son contrarias al ordenamiento jurídico o que lesionan sus derechos o intereses o que producen indefensión.

El recurso permite a la Administración revisar su actuación antes de plantear la cuestión ante los órganos jurisdiccionales.

Tras la modificación introducida por la Ley 18/2009 (y así sigue en el TR LSV) desapareció el recurso de alzada en el procedimiento sancionador de tráfico y la acción revisora se realiza por el mismo órgano que dictó el acto, es decir, en

nuestro caso por el Jefe Provincial, mediante el recurso potestativo de reposición. Junto al recurso de reposición existen otros medios de impugnación que se verán más adelante.

El recurso deberá presentarse por escrito (actualmente, también por medios telemáticos), no siendo necesaria la utilización de ningún impreso o papel especial ni la intervención de facultativo alguno. En el escrito del recurso deberán indicarse, por regla general, el nombre, apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, acto contra el que se recurre y fundamentos en que se apoya, lugar, fecha, firma, centro o dependencia al que se dirige y las demás particularidades que exijan las disposiciones legales, como el D.N.I.

Dicho escrito debe ser presentado ante la administración autora del acto utilizando los diversos medios de presentación señalados en la LSV o en la Ley 39/2015.

Es importante señalar la necesidad de que los recursos que se presenten en los Servicios Centrales, o en cualquier Jefatura de Tráfico distinta a la que tramita el expediente, sean remitidos con la mayor urgencia a la Jefatura de Tráfico instructora del expediente sancionador, que dejará constancia de su presentación y lo remitirá junto con el resto del expediente al departamento correspondiente para su digitalización, de forma que pueda ser conocido desde cualquier terminal sin necesidad de formato papel.

Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa (entre ellas la propia resolución del recurso) son recurribles en vía contencioso-administrativa .

Existen empresas especializadas en la realización de recursos para los denunciados y presentación de alegaciones, unas veces como servicios contratados como complementarios del seguro del vehículo y otras como servicio contratado de forma independiente. Es importante tener en cuenta que si dicha empresa interviene directamente, deberá contar con la oportuna representación del denunciado y que, en ocasiones, dan lugar a modificaciones del domicilio a efectos de notificaciones. Téngase en cuenta que la presentación de alegaciones puede perjudicar al denunciado, al impedir beneficiarse del pago reducido.

Regulación.

El recurso de reposición es potestativo. Es decir, puede interponerse recurso de reposición o puede irse directamente a la vía contencioso-administrativa (aunque no de forma simultánea). La resolución expresa o presunta del recurso de reposición abre nuevamente la vía contenciosa.

El recurso de reposición sólo es admisible cuando se trate de procedimientos sancionadores ordinarios, no siendo admisible en procedimientos abreviados ni en procedimientos sumarios de la LSV.

Los recursos en el procedimiento sancionador ordinario se regulan en el art. 96 LSV, que dispone:

. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 95.4.

2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por los Alcaldes, en el caso de las entidades locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica.

OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

Con el fin de dar una visión más amplia de las diversas posibilidades de revisión de los actos de la Administración, se incluye en este apartado un breve comentario al recurso extraordinario de revisión y a la revisión de oficio de la Ley 39/2015, así como a los supuestos de revocación de actos y rectificación de errores, junto con un sucinto comentario de las particularidades de los recursos en vía económico-administrativa contra los actos de gestión recaudatoria.

Recurso extraordinario de revisión.

Se podrá interponer contra actos firmes en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó, quien también será competente para su resolución, en los siguientes casos:

1º) Que al dictarlas se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente (plazo de interposición cuatro años). Puede

suceder esto cuando se detectan en el expediente inexistencia de pruebas determinantes o errores de datos fundamentales o que se aprecien ratificaciones incorrectas, etc.

2º) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. (Plazo de interposición de tres meses).

3º) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. (Plazo de interposición tres meses).

4º) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. (Plazo de interposición tres meses).

Cuando el recurso no se funde en una de estas causas, el órgano competente para la resolución podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite. También podrá inadmitirse en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

El competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión es el Jefe Provincial de Tráfico que dictó la resolución sancionadora y, en su caso, resolvió el recurso potestativo de reposición. Los recursos extraordinarios de revisión de expedientes resueltos por el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Centro ESTRADA), por delegación del Jefe Provincial, son igualmente competencia del Jefe Provincial que otorgó la delegación.

Revisión de oficio

La denominada comúnmente acción de nulidad procede tanto por propia iniciativa de la Administración como a solicitud del interesado cuando se dé alguna de las causas de nulidad señaladas en la ley 39/2015.

Cuando se trate de solicitudes formuladas por el interesado, el órgano competente para la revisión podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando la misma no se base en alguna causa de nulidad o carezca manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

Los expedientes de revisión de oficio, hayan sido o no objeto de recurso, deben ser remitidos a los Servicios Centrales para su resolución por el/la Directora/a General por competencia propia .

Revocación de actos y rectificación de errores.

Por último (y aunque no se trate de un recurso), hay que citar la posibilidad que establece la Ley 39/2015 al disponer que:

"1. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."

Cuadro general de competencia para resolver en materia de recursos.

- A resoluciones del Jefe Provincial (o Locales de Ceuta y Melilla)

- Los recursos potestativos de reposición contra las resoluciones de los Jefes Provinciales (o Locales de Ceuta y Melilla) corresponden al propio Jefe Provincial o Local de Ceuta y Melilla, por ser el autor del acto recurrido.
- En cuanto a los recursos extraordinarios de revisión, deben ser igualmente resueltos por del Jefe Provincial.
- Acciones de nulidad: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.
- Revisiones de oficio: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.

- A resoluciones del Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Centro ESTRADA):

Teniendo en cuenta que el Director del Centro actúa por delegación de los Jefes Provinciales (o Locales de Ceuta y Melilla), la situación es la siguiente:

- Los recursos potestativos de reposición contra las resoluciones del Director del Centro son resueltos por el Jefe Provincial, por ser el delegante.
- En cuanto a los recursos extraordinarios de revisión, su resolución corresponde al Jefe Provincial.
- Acciones de nulidad: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.
- Revisiones de oficio: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia .

7. RECURSOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS.

La LSV dispone respecto de la ejecución de sanciones que “una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en esta Ley”.

Y el artículo 110 LSV, en relación con el cobro de multas, señala que:

1. Una vez firme la sanción, el interesado dispondrá de un plazo final de quince días naturales para el pago de la multa. Finalizado el plazo establecido sin que se haya pagado la multa, se iniciará el procedimiento de apremio.
2. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en la normativa tributaria que le sea de aplicación, según las autoridades que las hayan impuesto.

Estas providencias de apremio dictadas y notificadas por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueden ser impugnadas mediante los recursos de reposición y/o las reclamaciones económico-administrativas ante los llamados Tribunales Económico-Administrativos.

El artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria señala en qué casos procede la suspensión del procedimiento de apremio, y en su artículo 167.3 se señalan los posibles motivos de oposición.

La tramitación por la interposición de un recurso o una reclamación económico-administrativa se regula en el Reglamento de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado mediante Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

El recurso de reposición (de la gestión de apremio).

El recurso de reposición es de carácter potestativo y deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa o acudir directamente a esta última. Es decir, no se pueden simultanear ambas opciones.

La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación del recurrente. No podrá interponerse la reclamación económico-administrativa hasta que se resuelva el recurso de reposición si se hubiera interpuesto éste.

El recurso de reposición exige que con el escrito de interposición se formulen las alegaciones tanto de cuestiones de hecho como de derecho y se acompañen los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita (art. 23), no siendo

preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Su presentación puede ser por vía telemática.

Para la vista del expediente, deberá comparecer el recurrente ante el órgano administrativo entre el día siguiente al de la notificación del acto administrativo y la finalización del plazo para la interposición del recurso, ya que una vez presentado el recurso no podrá examinarse el expediente.

Como norma general, la interposición del recurso no suspende el acto impugnado, aunque la ejecución del acto impugnado quedará suspendido cuando se preste garantía suficiente, o sin prestarla cuando se aprecie error aritmético, material o de hecho o se trate de sanciones que hayan sido objeto de recurso de reposición.

El plazo de interposición del recurso es de un mes y otro mes para su resolución (que será siempre en forma escrita) y notificación; y el silencio, en su caso, tiene sentido negativo.

La reclamación económico-administrativa y los Tribunales Económico-administrativos.

A pesar de su denominación, los Tribunales Económico-administrativos son órganos administrativos, no jurisdiccionales, con la única tarea de conocer de las reclamaciones económico-administrativas sometidas a su consideración. Sus miembros son funcionarios de las distintas administraciones, actuando como secretario un Abogado del Estado.

Existen dos categorías de Tribunales Económico-administrativos. El Tribunal Económico-administrativo Central con sede en Madrid y los Tribunales Económico-administrativos Regionales en cada Comunidad Autónoma y los Locales de Ceuta y Melilla.

Son objeto de las reclamaciones económico-administrativas, entre otros, los actos de gestión recaudatoria en vía de apremio dictados por los órganos de la Administración del Estado respecto de las multas impuestas en aplicación de la LSV.

Las reclamaciones por sanciones en materia de tráfico, al no superar el límite de 150.000€, sólo pueden ser objeto de reclamación en primera y única instancia ante los Tribunales Económico-administrativos Regionales o Locales, estando prevista la existencia de órganos unipersonales que mediante procedimiento abreviado conozcan de la reclamación en determinadas circunstancias, entre otras cuando la cuantía sea inferior a 6000 €, es decir, la inmensa mayoría de sanciones de tráfico.

Los Tribunales no podrán abstenerse de resolver y deberán dictar resolución expresa estimatoria o desestimatoria, o declarando la inadmisión de la reclamación, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante. Las resoluciones de los Tribunales pueden ser, a su vez, objeto de diversos recursos (de escaso interés en relación con las reclamaciones en materia de sanciones de tráfico).

La actuación de la jurisdicción económico-administrativa ha dado lugar a discrepancias por razón de competencias con la actuación de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, pudiendo concluirse que la competencia del Tribunal se limita exclusivamente a la revisión del acto recaudatorio impugnado, sin que por el contrario le incumba pronunciamiento alguno en orden a la procedencia o no de la sanción impuesta por la Jefatura de Tráfico

Siguiendo el Escrito Directriz SGON 01/09 de 21 de julio de 2009, cuando la sanción económica no ha sido abonada voluntariamente en los plazos establecidos, el expediente pasa a la vía ejecutiva para su cobro por el procedimiento de apremio, siendo impugnables estos actos de gestión recaudatoria mediante el denominado recurso económico-administrativo ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR).

Si la sanción es exclusivamente de multa, la resolución de los TEAR no plantea mayor problema, pero con la aparición del permiso por puntos se plantea la pretensión de que, ganada la reclamación ante el TEAR, se dejara igualmente sin efecto la detracción de puntos.

En estos supuestos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

El objeto de la reclamación ante el TEAR es distinto del recurso de tráfico. En consecuencia, no es posible otorgar los mismos efectos a ambas reclamaciones, de forma que la estimación de la reclamación por el TEAR no compromete la resolución adoptada en el ámbito de tráfico.

La actuación de la Jefatura en los casos de estimación de reclamaciones por parte de los TEAR será la siguiente:

1º. Anotarán en la aplicación informática la resolución adoptada y dejarán sin efecto la multa.

2º. Examinarán si, a la vista de la fundamentación de la resolución, **y de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Tráfico**, procede cualquiera de las siguientes alternativas:

- a) Mantener la resolución dictada en su día, lo cual significa que la *suspensión del permiso de conducción* (hoy desaparecida) y/o la detracción de puntos se ejecuta en todos sus términos.
- b) Instar la revocación de la resolución en su día dictada por los órganos de la Dirección General de Tráfico en base a la ley 39/2015. Esta revocación debe ser realizada en todos los casos por el/la Director/a General de Tráfico – haya habido o no recurso de *alzada* (hoy reposición) -, por lo cual se deberá remitir para su firma a la SGAR.

8. RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

A pesar de que los recursos administrativos permiten que la Administración revise sus propias decisiones, se hace necesario someter su actuación al control judicial de manera que se produzca, también en el ámbito administrativo, una tutela judicial efectiva como señala el artículo 24.1 de nuestra Norma Fundamental.

Dicho control se realiza mediante los denominados recursos contencioso-administrativos. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa se encuentra regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Su ámbito competencial de conocimiento es muy amplio, pero aquí debemos ceñirnos al control de las sanciones y sus posteriores recursos en materia de tráfico.

El Orden Jurisdiccional se halla integrado por los siguientes órganos:

- 1) Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en cada provincia.
- 2) Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (en cada CC. AA).
- 3) Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de ámbito nacional.
- 4) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (ámbito nacional).
- 5) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ámbito nacional).
- 6) Sala de Revisión del Tribunal Supremo.

Sin embargo, en relación con el tema que nos ocupa (las sanciones de tráfico y las resoluciones de los recursos potestativos de reposición contra ellas, realizadas por los Jefes Provinciales de Tráfico; la cuantía de las mismas y la competencia territorial), sólo nos interesan los dos primeros.

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del propio recurrente.

Aunque en teoría algunas sanciones de tráfico pueden llegar a los 20.000€, la gran mayoría no supera los 500€, por lo que en todo caso se tramitarán por el procedimiento abreviado, por no superar el límite de los 13.000€ que fija del art. 78.1 para este tipo de recurso. Incluso cuando junto a la sanción económica exista otro tipo de sanción que haga la cuantía indeterminada, la valoración no suele superar la cifra citada, por lo que no es corriente que las sanciones de tráfico se tramiten por el procedimiento ordinario.

Las partes del proceso:

En materia de sanciones de tráfico, el demandante suele ser el particular sancionado, siendo preceptiva la asistencia de abogado y procurador y la parte demandada la Administración autora de la resolución impugnada, que es defendida por los Abogados del Estado directamente o por medio de colaboradores.

Pretensiones de las partes. (art. 31 y ss.)

El demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho la sanción impuesta y la consiguiente anulación y, en su caso, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada que hubiera dado lugar a la sanción.

La acumulación. (art. 34 y ss.)

Tiene por finalidad reunir en un solo proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. Puede producirse de oficio o a instancia de parte, pero tiene poca trascendencia en recursos contra las sanciones de tráfico.

La cuantía del recurso. (art. 40 y ss.)

Como se ha indicado, su determinación es de gran importancia. La fija el órgano jurisdiccional una vez formulada la demanda y la contestación a la demanda. Cuando la sanción es exclusivamente de multa, su cuantificación no ofrece problema y será de cuantía determinada, pero cuando la multa lleve aparejada una suspensión de autorización o retirada de puntos dará lugar a una cuantía indeterminada. (Las sanciones más frecuentes son de hasta 500 €, pero en determinados supuestos pueden llegar hasta 20.000 €). En cuanto a la suspensión, ha desaparecido la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción, pero se mantiene la posible suspensión de otras autorizaciones. Por su parte, el expediente de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida del saldo total de puntos no es objeto de estudio en este tema.

Téngase en cuenta que la cuantía es determinante para fijar la competencia y puede tener gran trascendencia en relación con los recursos posibles tras la sentencia.

Interposición del recurso y reclamación del expediente. (art. 45)

En función de la cuantía, el procedimiento contencioso puede ser ordinario o abreviado (art. 78). En el ordinario la tramitación es la siguiente:

El recurso comienza normalmente con la interposición de la demanda, escrito muy sencillo encabezado normalmente por el procurador, que se limita a identificar el acto o resolución sancionadora recurrida y la petición de que se tenga por interpuesta la reclamación y acompañado de los documentos que procedan (poderes, resolución sancionadora, etc.)

No hay que confundir la interposición de la demanda con la demanda propiamente dicha, que es posterior. Como se verá posteriormente, en el procedimiento abreviado el recurso se iniciará directamente por la demanda.

La interposición del recurso no suspende, en principio, la eficacia del acto impugnado, pero en el propio escrito de interposición se puede solicitar la adopción de medidas cautelares, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder la finalidad del recurso.

Cuando el administrado pide la suspensión de la ejecución de la sanción impugnada, en general no procede acceder a la suspensión del pago de la multa; en cuanto a la pérdida de puntos, tampoco se suele acceder a la suspensión, salvo que se trate de puntos que supondrían la pérdida de vigencia del permiso, en cuyo caso podría causarse un daño de difícil reparación, al igual que en los supuestos de suspensión de las autorizaciones para ejercer personas y centros.

Plazo de interposición del recurso. (art.46)

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de la sanción o de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (el procedimiento sancionador de tráfico tiene numerosas previsiones de resoluciones presuntas).

Admitida la interposición de la demanda, el órgano jurisdiccional requerirá a la Jefatura de Tráfico que le remita el expediente administrativo.

(NOTA: En la actualidad todos los documentos de los expedientes sancionadores se encuentran digitalizados, por lo que se realizan gestiones para que dichos expedientes puedan ser remitidos por medios informáticos o incluso puedan ser obtenidos desde el propio órgano jurisdiccional).

El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente y se entenderá personada por el envío del expediente.

La demanda. (art. 52)

Una vez recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal, se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de 20 días. El escrito es claramente antiformalista, semejante a un recurso administrativo, conteniendo los hechos y fundamento de derecho y en el se puede pedir que se reciba el pleito a prueba o se falle sin prueba y también se puede pedir la celebración de vista pública. Es importante que exista congruencia de la petición entre la demanda, la interposición y, en su caso el recurso, para evitar incurrir en desviación procesal.

La contestación a la demanda. (art. 54 y ss.)

Presentada la demanda, se dará traslado de la misma a la parte demandada para su contestación en el plazo de 20 días.

Prueba. (art. 60 y 61)

Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba en los escritos de demanda y contestación a la demanda, que se desarrollará con las normas generales establecidas para el proceso civil.

Vista y conclusiones. (art. 62 y ss.)

La vista o el escrito de conclusiones son los últimos actos del proceso antes de la sentencia.

Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.

Si se celebra vista, se dará la palabra a las partes para que de forma sucinta expongan sus alegaciones, pero lo normal es que no haya vista, sino escrito de conclusiones en el que las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos con que apoyen sus pretensiones, quedando el pleito concluso para sentencia.

En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación.

Procedimiento abreviado. (art. 78)

El procedimiento abreviado se inicia por demanda acompañada por los documentos en que el actor funde su derecho. Una vez presentada, si el Secretario Judicial admite la demanda, acordará su traslado al demandado, cita a las partes para la celebración de la vista y ordena a la Administración que aporte el expediente con al menos 15 días de antelación del término señalado para la vista. El Juez dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la celebración de la vista.

La sentencia. (art. 67 y ss.)

En la sentencia se deciden todas las cuestiones planteadas, pero sólo las cuestiones planteadas (principio de congruencia). Y puede consistir en la inadmisibilidad, la estimación o la desestimación del recurso.

Aunque la sentencia es el modo normal de finalización del procedimiento contencioso-administrativo, hay que tener en cuenta también los otros modos de terminación: desistimiento del recurrente, allanamiento del demandado y satisfacción extraprocesal.

La estimación del recurso supone aceptar las pretensiones del recurrente y darle la razón. La sentencia eventualmente puede ser total o parcialmente estimatoria.

La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Las sentencias de los Juzgados de los Contencioso-Administrativo serán susceptibles de recurso de apelación siempre que su cuantía sea igual o superior a 18.000€ (planteándose nuevamente el problema de las sanciones de cuantía indeterminada).

El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, quien elevará los autos, el expediente administrativo y los escritos presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (en cada CC. AA.).

La ejecución de sentencias.

La ejecución de sentencias forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y la potestad de hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales.

Devolución de la multa por ejecución de sentencias.

Las instrucciones de la DGT para estos supuestos son las siguientes:

Recibido en una Jefatura Provincial un fallo judicial estimatorio de la pretensión aducida por el recurrente, consistente por tanto en la devolución de la multa administrativa, con o sin imposición de costas a la Administración, y sin esperar a que los interesados lo reclamen, deberán requerirles para que, a efectos de ejecutar la sentencia dictada en el procedimiento judicial de que se trate, faciliten sus datos bancarios, con el fin de transferirles el importe de la sanción y las costas, en su caso, tramitando a continuación, con aportación de copia auténtica o fotocopia compulsada de la sentencia y los citados datos bancarios, el correspondiente expediente de devolución ante los Servicios Centrales de la DGT (Instrucción 01/S-53).

NOTA: La publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ha tenido una importante incidencia en la presentación de recursos contencioso-administrativos. El artículo 2 de dicho texto legal enumera los actos procesales cuyo ejercicio constituye el hecho imponible de

la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en su apartado c) se refiere a la interposición del recurso contencioso-administrativo. Por su parte, el artículo 4.1 recoge como exención de la tasa en su apartado f) la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

Por tanto, desde el 22 de noviembre de 2012, la presentación de un recurso contencioso-administrativo frente a una resolución sancionadora por infracciones de tráfico exige el previo pago de una tasa, salvo en los casos de silencio administrativo negativo o inactividad administrativa, en los que los ciudadanos están exentos de dicho pago.